

Alza de combustibles: una decisión que golpea fuerte en Aysén

El alza en el precio de los combustibles anunciada por el gobierno no es una noticia más para Aysén. Es una señal política. Una más, en una larga lista de decisiones tomadas desde el centro que no logran —o no quieren— distinguir entre realidades territoriales profundamente distintas.

Porque aquí el combustible no es solo un insumo. Es una condición de funcionamiento. Sostiene el transporte de alimentos, la conexión entre localidades, la actividad productiva y buena parte de la generación eléctrica. En Aysén, hablar de combustible es hablar del costo base de la vida.

Por eso, cuando se anuncia un alza sin medidas específicas para territorios extremos, lo que se transmite no es solo un ajuste económico: es una forma de gobernar. Una que sigue operando bajo la lógica de la uniformidad, incluso cuando sus efectos son claramente desiguales.

Las consecuencias no tardan en aparecer. El encarecimiento del transporte impacta de inmediato en los precios de productos básicos. La dependencia de abastecimiento desde otras regiones amplifica el problema. Y la matriz energética, aún ligada en gran parte a combustibles fósiles, termina por trasladar el alza a múltiples dimensiones de la vida cotidiana.

Pero el punto más relevante no está en la descripción del impacto, sino en la ausencia de respuesta política. Porque en una región donde el Estado tiene un rol protagónico —precisamente por las limitaciones estructurales del mercado— cabría esperar medidas que reconozcan esa condición. No como un privilegio, sino como una corrección necesaria.

Aquí aparece la tensión de fondo. Se habla de descentralización, de equidad territorial, de fortalecer las regiones. Pero frente a decisiones concretas, esas definiciones se diluyen. El costo se distribuye de manera homogénea, aunque sus efectos sean profundamente desiguales.

La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo Aysén seguirá absorbiendo decisiones que no consideran su realidad? Porque no se trata solo de este aumento. Se trata de un patrón. De una forma de diseñar política pública que, en los hechos, traslada los mayores costos a los territorios más aislados.

Y ese traslado no es neutro. En Aysén hay menos alternativas, menos competencia y menos margen de ajuste. Cada alza se siente más, dura más y afecta a más ámbitos. Desde el precio de los alimentos hasta la viabilidad de emprendimientos locales, todo se tensiona.

El problema de fondo es político. Es la persistencia de una mirada centralista que administra el país como si fuera homogéneo. Que reconoce las diferencias en el discurso, pero no en las decisiones.

Si no hay medidas diferenciadas frente a impactos diferenciados, la descentralización queda reducida a una declaración. Y lo que se consolida, en la práctica, es una desigualdad que se arrastra y se profundiza.

Porque en Aysén, el alza de los combustibles no es solo un dato económico. Es la evidencia concreta de que el territorio sigue estando fuera del centro de las decisiones. Y mientras eso no cambie, cada ajuste seguirá teniendo el mismo resultado: una carga mayor para quienes ya viven con menos margen.